



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** EJECUTIVO LABORAL ANEJO PROCESO ORDINARIO  
**Radicado:** 05001-31-05-008-2019-00599-01 (E2-22-387)  
**Accionante:** LIGIA VÉLEZ DE MOLINA  
**Accionada:** UGPP  
**Procedencia:** JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Asunto:** EXCEPCIONES DE MÉRITO

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL SUBSECUENTE AL PROCESO ORDINARIO conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2019-00599-01 (E2-22-387), instaurado por LIGIA VÉLEZ DE MOLINA en contra de la UGPP, con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad oficial accionada contra el auto mediante el cual se resolvieron las excepciones de mérito formuladas, proferido el 23 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

### **1. ANTECEDENTES**

La señora LUZ DARY VÉLEZ BETANCUR, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de la UGPP, en procura de obtener el pago de las siguientes obligaciones insolutas:

- a.** Por el valor de \$4.618.215,00 por concepto de la diferencia resultante entre la indexación del retroactivo pensional reconocido y la que fuera ordenada en sede judicial.
- b.** Por el valor de la liquidación de costas fijadas en el proceso ordinario primigenio.

- c. Por el valor de “...los intereses moratorios que se causen por el impago oportuno de las sumas adeudadas en sentencia condenatoria contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP”.

Como fundamento de sus pedimentos, indicó que “[c]on Sentencia(sic) del 25 de enero de 2017 del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, ordenó cancelar la diferencia en el retroactivo pensional causado desde el 1° de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, en la suma de \$166.037.787 y autorizándose el descuento de los aportes a salud de la pensionada, del retroactivo pensional ordenado. Se condena a la UGPP a pagarle a la demandante, la INDEXACION, desde el momento de reconocimiento de las diferencias en los retroactivos pensionales desde febrero de 2014 y hasta que se verifique el pago. Y por COSTAS a cargo de la condenada UGPP, se fijan por agendas en derecho la suma de \$11.065.755, equivalentes a 15 S.M.M.L.V.”.

Precisó que, la decisión de instancia fue modificada por esta Corporación al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la accionada, ordenando “...CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP- a reconocer y pagar a la demandante por concepto de retroactivo causado por la diferencia pensional entre el 01 de febrero de 2014 al 30 de septiembre de 2016 la suma de \$148.953.044, autorizándose el descuento de los aportes en salud y la suma de \$9.874.079 en caso de que el valor haya sido cancelado por la UGPP. A partir del 01 de octubre de 2016 la UGPP deberá seguir reconociendo a favor de la actora un valor de \$5.127.838 por concepto de mesada pensional derivada de la sustitución pensional de la pensión de jubilación que devengaba su cónyuge IVAN ARTURO MOLINA VÉLEZ, sin perjuicio de los incrementos que establezca el Gobierno Nacional anualmente, de manera vitalicia y a razón de 14 mesadas al año”; mientras que las costas fueron tasadas y liquidadas en un valor de \$9.927.125.

Expuso que “[d]espués de múltiples derechos de petición y una tutela, para que se explicaran por la entidad los pagos realizados, el resultado fue el siguiente:

-Para la condena: \$148.953.044: Se verifica un pago para el mes de diciembre de 2018 por valor de \$130.052.331,00\*, menos el valor de la mesada de diciembre (\$5.202.109,99), arroja un saldo de \$124.850.221,01. Y otro pago en el mes de enero de 2019 por valor de \$14.639.759,29\*, menos la mesada para enero (\$5.345.506,58) de 2019 da un saldo de \$9.294.252,71. Sumadas las cantidades en negrilla da el valor de \$134.144.473,72, que corresponde al valor de la condena después de restar \$14.411.711,07 por descuentos en salud”. (...) Para la INDEXACION(sic), se toma como base el valor de suma de \$619.166,63

*desde marzo de 2014 a septiembre de 2016 y arroja un resultado de \$19.194.165,56, cancelados con la nomina(sic) de marzo de 2019, así \$25.117.383,99, menos mesada del mes de marzo \$5.345.506,58, para un valor efectivamente cancelado de \$19.771.877,41\*\*.* (...) *“De las COSTAS, aun(sic) no se ha recibido el pago”.*

Finalmente, informó que la ejecutada no ha pagado de manera completa las obligaciones dinerarias a su cargo y que fueran antes individuadas.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La juzgadora de instancia en auto del 15 de abril de 2021 (doc.05, carp.01) resolvió librar mandamiento de pago en los precisos términos solicitados por la actora y por los intereses de mora de que trata el artículo 1617 del CC, no sin antes disponer la notificación personal de la entidad ejecutada. Surtida la diligencia de enteramiento, la UGPP se opuso a la prosperidad de los pedimentos formulando en su defensa las excepciones de mérito que rotuló como pago, inexistencia del título ejecutivo, prescripción y compensación, (doc.12, carp.01); medios exceptivos que fueron puestos en conocimiento de la parte ejecutante, conforme lo prevé el artículo 443 del CGP (doc.13, carp.01).

### **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 23 de junio de 2022 (docs.16 a 18, carp.01), mediante auto emitido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la que declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas, determinando continuar con la ejecución para el pago forzado de *“...los capitales insolutos indicados en los literales a), b) y c) [d]el numeral 1° del auto que libró mandamiento de pago, correspondiente al saldo insoluto de la indexación de la condena, las costas procesales y los intereses legales sobre este último concepto”.*

Para sustentar su decisión, la juez singular de primer grado luego de invocar artículo 442 del CGP, sostuvo que las excepciones que proceden en estos trámites corresponden a las de prescripción, compensación y pago. Así, recordó que entre la fecha en que se hizo exigible las obligaciones contenidas en el título ejecutivo traído en pos del recaudo y el momento en que se presentó la demanda ejecutiva, no había transcurrido el término de 3 años de que trata el artículo 151 del CPTSS, no operando así la figura jurídica de la prescripción. De manera similar, resaltó que la parte accionada ha mantenido insolutas las obligaciones dinerarias cuya satisfacción pretende la señora LIGIA VÉLEZ DE MOLINA, como tampoco encontró acreditados el cumplimiento de los requisitos legales para la figura de la compensación, para

entender, de consiguiente, que se extinguieron los derechos de contenido económico que aquí se reclaman.

Luego asentó que, la orden de reconocer y pagar intereses legales sobre las sumas adeudadas deviene procedente por expreso mandato del artículo 1617 del CC, los que se presumen de pleno derecho y por el mero retardo del deudor en pagar las sumas líquidas de dinero adeudadas (minuto 11:45 a 17:18, doc.17, carp.01).

### **1.3. Recurso de Apelación**

El procurador judicial de la UGPP inconforme con la decisión, interpuso recurso apelación en procura de que se revoquen los intereses legales a los que fue condenada su prohijada. Con tal propósito aseveró que no existe título ejecutivo que soporte la causación de esta obligación, máxime si se considera que, la sanción por el no pago oportuno de mesadas pensionales se encuentra regulada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Prosiguió destacando la buena fe con la que ha actuado la UGPP y, por ende, a su criterio debe revocarse además la condena en costas impuesta (minuto 17:34 a 19:09, doc.17, carp.01).

### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El recurso de apelación se admitió el 18 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 24 del mismo mes y año (doc.04, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes.

La vocera judicial de la impulsora procesal da inicio a sus alegaciones, expresando que *“...se puede inferir que no se atacan las decisiones de la primera instancia, excepto en cuanto a lo que se refiere a la sustentación normativa del cobro de los intereses moratorios, mas no en la procedencia o no de su imposición por el a quo, lo que deja incólume la decisión del juzgado, puesto que los intereses moratorios de la condena, tienen asidero en que si no se han cancelado las sumas ordenadas y realmente adeudadas por la UGPP, son procedentes ante el retardo sufrido en perjuicio de la parte demandante”*. En lo atinente a la buena fe alegada por la impugnante, puntualizó que *“...el reconocimiento de las costas, no se trata de la buena o mala fe de la entidad demandada, sino a su actuación obstinada de no pagar lo que debe y obligar en consecuencia a los ciudadanos a cobrar a punta de acciones judiciales”* (doc.04, carp.02). El poderhabiente judicial de la entidad ejecutada guardó silencio.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

## **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si el ejercicio ponderativo al emitirse la providencia impugnada que resolvió la excepción de mérito de inexistencia del título ejecutivo corresponde a las obligaciones contenidas en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en desarrollo del proceso ordinario laboral primigenio y, por tanto, si hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de los intereses de mora cuestionados por la censura y la condena en costas.

## **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión impugnada en cuanto declaró no probados los hechos sobre los cuales se funda la excepción de mérito de inexistencia del título ejecutivo y condenó en costas a la ejecutada, con arreglo a los planteamientos que pasan a exponerse:

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y

por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que en sede judicial se resolvió condenar a la ejecutada UGPP a reconocer y pagar de manera indexada a favor de la señora LIGIA VÉLEZ DE MOLINA “...por concepto de retroactivo causado por la diferencia pensional entre el 01 de febrero de 2014 al 30 de septiembre de 2016, la suma de \$148.953.044, autorizándose el descuento de los aportes en salud y la suma de \$9.874.079 en caso de que el valor haya sido cancelado por la UGPP; debiendo esta última entidad seguir reconociendo la pensión de sobrevivientes a la actora en un valor de \$5.127.838, y que la UGPP resultó adeudando las sumas de \$4.618.215,00 y \$9.927.125 por concepto de la indexación del retroactivo pensional reconocido y la liquidación de costas, respectivamente.

En norte a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso, memora la Sala que la convalidada a juicio ubica como punto nodal del disenso, la orden de pago de los intereses moratorios de artículo 1617 del CC. En tal contexto, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que, el objeto, o, si se quiere, el fin último, de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*<sup>1</sup>; tanto más cuanto que, las actuaciones judiciales de esta índole solo terminan por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

De modo que, al momento en que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, librará mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluble<sup>2</sup>; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, “...no solo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado”. -Subrayado intencional de la Sala-

<sup>1</sup> Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

<sup>2</sup> Artículo 430 del CGP.

En línea con lo anterior, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional<sup>3</sup>, en tanto lo allí dispensado es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante<sup>4</sup>, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio<sup>5</sup>; señalando en este último caso el artículo 446 del CGP, el cual reza: “[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios”.

En ese estado de cosas, emerge en evidente, que si bien es la etapa de la liquidación del crédito donde se concreta el valor realmente adeudado por la parte ejecutada<sup>6</sup>, no se pasa por alto que este ejercicio aritmético, en tratándose de ejecución por sumas de dinero, debe someterse al marco de lo dispuesto en el mandamiento de pago; de ahí que, resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y de otro, respondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada; lo que finalmente acaece con la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito y la posterior liquidación del crédito.

Lo expuesto para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que surte la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, los profesionales del derecho que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las solicitudes que estimen procedentes en orden a defender los intereses que les han sido confiados, puesto que éstos, como conocedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.

En el *sub litum* y de cara a la apelación de la decisión de dar por no probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo formulada por la ejecutada con miras a enervar el pago de los intereses por mora de que trata el artículo 1617 del C.C., traslúcido se muestra que el censor introdujo impropriamente cuestionamientos referentes a la causación de los mencionados intereses moratorios por la dilación injustificada en el pago del retroactivo pensional,

<sup>3</sup> Artículo 424 del CGP

<sup>4</sup> Artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP, artículos 28 y 65 del CPTSS.

<sup>5</sup> Artículos 442 y 443 del CGP.

<sup>6</sup> Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.

pretermitiendo íntegramente que la falladora de primer grado determinó que la medida resarcitoria sería aplicable únicamente al valor de las costas que fueran liquidadas y aprobadas en el proceso ordinario laboral que se surtió entre las mismas partes, excluyendo por contera a las mesadas pensionales insolutas, tal y como se extrae del proveído a través del cual se libró la orden de pago coactivo (doc.05, carp.01).

Es por ello que, la mención al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las decisiones de la Corte Suprema a las que se refiere como argumentos basilares del recurso de impugnación vertical, no podían servirle de parámetro ni precedente para oponerse a la causación de la sanción de mora, que se insiste, no se dispensó para las mesadas pensionales.

Lo expuesto, deviene útil para educir que el recurrente no se ocupó de atacar las reales conclusiones que sirvieron de fundamento para resolver el medio exceptivo en la decisión impugnada, con lo cual tales inferencias se mantienen incólumes y resultan suficientes para desestimar la censura.

Finalmente, no hay lugar a revocar la condena en costas dispensada por la juzgadora de primer nivel, en la medida en que, de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte Constitucional<sup>7</sup> sobre la materia, “[l]a condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Por tanto, lo que viene de decirse es suficiente para desestimar la impugnación en punto a este cargo.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiendo que el recurso de apelación interpuesto por la UGPP no salió adelante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho y en favor de la ejecutante, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000.

---

<sup>7</sup> Sentencia C-157 de 2013.



En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

#### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** CONFIRMAR el auto dictado el 23 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por LIGIA VÉLEZ DE MOLINA, y en contra de la UGPP, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.


**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de la UGPP, fijándose como agencias en derecho, en favor de la ejecutante LIGIA VÉLEZ DE MOLINA, la suma de un SMMLV equivalente a \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

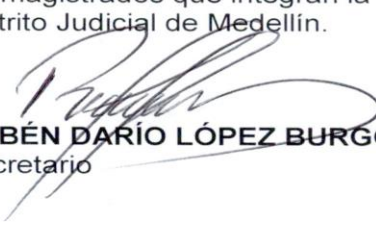
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

#### CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario